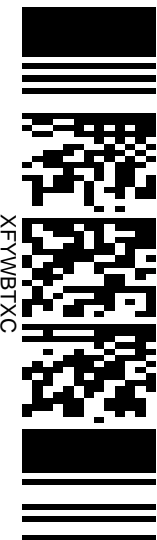


Punta Arenas, ocho de abril de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Matías Ignacio Rivadeneira Castro, abogado en representación judicial de Nora Matilde Águila Barría Rut 5.102.384-6, Francisca del Carmen Aguilar Rut 3.525.170-7, José Clodormiro Aguilar Mansilla Rut 3.798.358-6, Mario René Aguilar Cárdenas Rut 4.821.052-k, Hugo Bahamondez Flandes 4.507.658-K, Conrado Barría Mansilla 3.958.334-8, Delicia Barrientos González 2.756.668-5, José Venerando Beato Muñoz 5.169.450-3, Víctor Hugo Cabezas González 5.317.582-1, Miguel Segundo Campos Gallardo 4.634.964-4, María Elsa Cárdenas Cárdenas 3.391.569-1, Margarita de Lourdes Carrasco Preller 7.640.455-0, Héctor Nolasco Carrillo Saavedra 6.744.948-7, José Alejandro Catelican Rojel 8.075.209-1, José Rosauro Castro Henríquez 10.502.963-2, José Alberto Catrin Marcareña 5.344.312-5, Juan Facundo Chaura Talma 3.047.535-6, Olga Chávez Chávez 12.155.938-2, Víctor Miguel Contreras Aguilar 8.849.933-6, Pedro Miguel Curumilla González 5.330.400-1, Enrique Ramón Díaz Paredes 5.833.314-k, José Segundo Díaz Haro 5.296.764-3, María Miguelina Díaz Nieto 3.866.674-6, Carlos Ángel Drazic Alarcon 6.483.195-k, María Elena Eugenin Pacheco 8.086.989-4, Maria Eugenia Escanila Tirapegui 7.980.291-3, Pedro España Andrade 4.384.977-8, José Nolberto Garay Miranda 5.492.614-6, María Fresia Gómez Tavie 4.918.830-7, Fernando Hugo Gómez Aguilar 4.963.722-5, Abelardo Gómez Pizarro 4.268.287-k, Norma del Carmen Hernández Villegas 3.864.867-5, Rosalia Elena Huenel Guerrero 5.363.916-k, María Carolina Huentrutripay Arteaga 8.793.831-k, Iginio Mancilla Soto 3.208.644-6, Aída del Carmen Manríquez Sandoval 4.682.092-4, Rene Jorge Matulich Matulich 5.519.415-7, Mirta Nury Millapani Muñoz 6.503.728-9, David Edgardo Millacura Nain 5.874.909-5, Sergio Salvador Miranda Paredes 5.879.459-7, Isabel del Carmen Mondaca Vallejos 6.241.736-6, Luis Enrique Mora Almonacid 7.901.645-4, Adolfo del Carmen Negue Navarro 4.463.832-0, Luis Raúl Ojeda Soto 5.069.277-9, Teodoro del Carmen Ojeda 3.897.854-3, Aurora



Oyarzun Hernández 12.161.190-2, Erna Pavez Castro 2.517.377-5, Hugo Manuel Pérez Barrientos 5.388.027-4, Eduardo Gonzalo Pérez 3.941.504-6, Silvia Irene Perez Cárcamo 7.389.505-7, Olvido Prieto Vargas 9.725.544-k, Sandra Ramona Quezada Vargas 6.466.578-2, Berty Omar Saldivia Cárcamo 7.023.241-3, José Ricardo Reyes Ojeda 4.868.126-3, Honoria del Rosario Silva Velásquez 4.216.979-K, Jorge Antonio Silva Medina 4.129.471-K, Norma Lizett Soto Ceja 5.097.385-9, Waldo Fernando Stela Prado 5.325.652-k, Jertrudiz Vallejos Muñoz 5,018,477-3, Raquel Valderrama Díaz 3.163.234-K, Héctor Rene Vargas Gómez 4.240.091-2, Ana Patricia Vidal Ojeda 10.326.588-6, Marina Inés Vidal España 4.828.08-4, Juan Velasquez Perez 5.365.275-1, Humberto Velasquez Vera 5.330.453-2, Rene Vidal Santana 4.217.990-6, Luis Hernán Villegas Oyarzo 2.032.346-9, Luis Vivar Vivar 5.374.039-1 y Edita Carmen Flores Carrasco 8.802.502-4, todos residentes del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) "Cristina Calderón Harbán", deduce recurso de protección contra de Juan Santiago Villa Martínez, cédula de identidad número 14.422.565-1, juez del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, porque ha dictado sendas medidas cautelares, en contra de los imputados José Díaz y Teodoro Ojeda.

En Causa RIT N° 4270-2020, RUC N° 2001035733-1, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas con fecha 10 de febrero de 2022, se celebra audiencia de conocimiento de investigación respecto del imputado JOSÉ SEGUNDO DÍAZ HAROS, el juez don Juan Santiago Villa Martínez deja sin efecto medida cautelar de internación provisional en el Hospital Clínico de Punta Arenas y procedió a decretar medida cautelar de Privación Total de Libertad, en el ELEAM Cristina Calderón individualiza que esta medida se corresponde con la dispuesta en el artículo 155 letra a) del Código Procesal Penal.

En Causa RIT N° 1340-2021, RUC N° 2100382648-9, del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, con fecha 26 de enero de 2022, se efectúa audiencia de medidas cautelares. En dicha audiencia respecto del imputado TEODORO DEL CARMEN OJEDA, el Juez de Garantía don Juan Santiago Villa Martínez ordena que



el imputado sea recibido, por cierre del albergue en que cumplía medida cautelar de arresto domiciliario total, en el ELEAM Cristina Calderón Harban.

Esta parte, en conjunto con la ONG Pater Nostrum, han hecho presente en ambas causas establecimiento no cumple con las condiciones para operar como un recinto para el cumplimiento de medidas cautelares penales, así como tampoco para operar como recinto para la detención de condenados en este tipo de causas.

Manifiesta que se solicitó ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, donde se encuentra radicada actualmente la causa contra el acusado don JOSÉ SEGUNDO DÍAZ HAROS lo cual fue rechazado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas. Por tanto, este Servicio no es interviniente en la respectiva causa, por tanto se encuentra impedida de ejercer los medios de impugnación que confiere el Código Procesal Penal a los intervinientes en las respectivas causas.

Da cuenta de la actividad del SENAMA y añade que Los ELEAM en general, no cuentan con las condiciones para privación de libertad de una persona. No están concebidos como tales, no lo permite el Decreto 14 de 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores, y no lo contempla la Ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

Además, el Decreto N° 49, ya mencionado, en su artículo 5°, especifica los requisitos de ingreso al ELEAM, entre los cuales se destaca "no tener una enfermedad física o mental que requiera atención imprescindible en un establecimiento hospitalario; lo que se acreditará con el correspondiente certificado médico", requisito que es reforzado por las Orientaciones Técnicas del Programa ELEAM.

Sostiene que dichos centros no se encuentran diseñados para recibir a una persona en situación de privación de libertad, y mucho menos de las características particulares del caso de los imputados, de las que se tomó conocimiento en



las respectivas audiencias en que se dictaron los actos objeto de este recurso.

Considerando los antecedentes tenidos a la vista durante la tramitación de los presentes casos ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, los imputados no se encuentran en las condiciones precedentemente expuestas, por lo que su internación en el ELEAM constituye un riesgo tanto para los residentes del ELEAM, personas mayores con algún grado de dependencia, como para los propios funcionarios del Establecimiento, los cuales no cuentan ni con la experiencia ni la preparación para afrontar este tipo de casos, lo cual no obedece a una falta de preparación, sino a la naturaleza de los ELEAM como ya se ha explicado.

Arguye que las personas precedentemente individualizadas, en cuyo beneficio se interpone el presente recurso, ven perturbada y amenazadas sus garantías constitucionales relativas a la integridad física y psíquica, consagradas en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por cuanto estamos ante dos casos de internación de imputados que, en conformidad a lo expuesto en los propios expedientes que obran a disposición del público en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, que pueden implicar un serio riesgo para ellas.

Le resulta inexplicable cómo es que, en relación a JOSÉ SEGUNDO DÍAZ HAROS, de haberse ordenado la internación del imputado en un recinto asistencial de salud, que cumple con mejores condiciones para tratar casos como el del imputado, se termina disponiendo su traslado, para el cumplimiento de una medida cautelar (Art. 155 letra a) del Código Penal) a una residencia cuyos objetivos, finalidades y especialidad del personal a cargo del cuidado de las personas adultas mayores residentes en el ELEAM no se condicen con los requerimientos tenidos a la vista por el propio tribunal para ordenar la internación en un establecimiento psiquiátrico. Más aun cuando en ambas causas (RIT 4270-2020 y RIT 2678-2018), personal de este Servicio presentó y expuso la situación de los ELEAM en general, y en particular del ELEAM



Cristina Calderón de Punta Arenas, sin que fueran atendidas sus observaciones.

Respecto de TEODORO DEL CARMEN OJEDA, en atención al tipo de delitos por los cuales es imputado en autos RIT 1630-2021 igualmente genera una situación de riesgo para los residentes del ELEAM, para el cual no se encuentran capacitados los funcionarios del mismo en su prevención.

Así las cosas, manifiesta que la medida adoptada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas- tal como se ha descrito- implica un desconocimiento de las obligaciones del Estado de Chile en relación a los adultos mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo, conforme lo dispuesto en el artículo 12, literal c), numeral iv., de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile y que se encuentra vigente

Además se vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, por cuanto implica menoscabar y dar un tratamiento diferenciado -en base a un acto arbitrario- a los funcionarios y residentes del ELEAM Cristina Calderón, en tanto se les impone un factor de riesgo a la seguridad que el Estado debe proporcionarles como usuarios de un programa de cuidados a largo plazo, en conformidad a lo ya referido respecto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente expone que se afecta el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sobre el derecho que tienen los individuos en cuyo beneficio se interpone el presente recurso de protección, de residir en el ELEAM conforme la regulación del programa, imponiendo un gravamen no contemplado en la normativa que rige en el programa, ni en los correspondientes actos administrativos que aprueban el ingreso del residente en su calidad de tal.

Solicita, se acoja el recurso, adoptando las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en especial, dejar sin efecto las



medidas cautelares precedentemente individualizadas, en cuanto deben ser cumplidas en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) "Cristina Calderón Harbán", de la ciudad de Punta Arenas.

Acompaña a su recurso, Causa RIT 4270-2020, Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Causa RIT 1340-2021, Juzgado de Garantía de Punta Arenas, Causa RIT 2678-2021, Juzgado de Garantía de Punta Arenas y Causa RIT O-14-2022, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.

**Informa el recurrido, Juan Santiago Villa Martínez, Juez Titular del Juzgado de Garantía de Punta Arenas,** solicitando se tenga por evacuado el informe y se proceda al rechazo del recurso, exponiendo los antecedentes de las causas en cuestión.

Manifiesta que el Constituyente lo previó el recurso sólo para eventos en que un juez obrara fuera del marco de un proceso, para el que se han destinado recursos propios, que son los denominados ordinarios, de modo de alejar el riesgo de desnaturalización de la acción constitucional.

Por otro lado cuestiona la oportunidad en que se deduce el presente recurso de protección, al menos en lo que respecta a la resolución dictada en la causa RIT 1340-2021, seguida en contra del señor Teodoro del Carmen Ojeda, puesto que, según el registro de esa causa, la resolución cuestionada aparece pronunciada en audiencia de 26 de enero, misma que fuera notificada por correo electrónico al SENAMA con fecha 27 de enero, en circunstancias que el recurso de protección figura presentado el 12 de marzo.

Respecto de José Segundo Díaz Haro, imputado en la causa RIT Nro. 4270-2020 destaca que en la audiencia en cuestión participaron no sólo los intervinientes en el procedimiento, a saber, una Fiscal del Ministerio Público, el abogado Defensor Penal Público designado para la defensa del imputado y la curadora ad litem de éste, sino también una representante del SENAMA, la abogada del Servicio de Salud de Magallanes doña Alejandra Gálvez y el médico tratante del imputado, el doctor don Álvaro Ríos, de la Unidad de Corta



Estadía de Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes, todos los cuales tuvieron oportunidad de expresarse acerca de la materia en específico que se iba a abordar en ese momento de la audiencia, relativa a la determinación del lugar más adecuado para que el imputado cumpliera alguna medida cautelar privativa de libertad, tomando en consideración su situación de salud y condición de adulto mayor.

Después hace uso de la palabra una personera en representación del ELEAM Cristiana Calderón, se limitó a decir que el ELEAM presenta un brote de COVID 19 y que hasta ese momento tenían los "cupos listos por ingresos", no contando con plazas para un nuevo ingreso. Indicó que si bien el perfil de dependencias al alcohol para un ingreso es de moderado a severo, se requiere además que el postulante no presente alguna patología aguda que no sea tratable dentro del establecimiento.

De esta manera, entonces, rechaza las imputaciones de arbitrariedad asignada a la resolución impugnada, la decisión jurisdiccional, en su génesis, no ha surgido de la mera ocurrencia inopinada y motu proprio del suscrito, ya que tal intervención ha tenido su basamento en una audiencia en la cual el Tribunal escuchó la opinión de todos los intervinientes, profesionales e instituciones colaboradoras asistentes, quienes tuvieron la ocasión de expresarse latamente acerca de la materia en cuestión, dictándose, posteriormente, una resolución judicial que, además, ha sido sucintamente fundada, como lo exige el artículo 36 del Código Procesal Penal, y por la cual en definitiva se sujetó al imputado a la medida cautelar que actualmente cumple en el ELEAM Cristiana Calderón.

Así, a partir del tenor de lo debatido e informado en la audiencia en cuestión, ha sido el propio médico psiquiatra tratante del imputado quien se encargó de puntualizar que la situación de ingesta de alcohol por parte del imputado se encontraba tratada, no presentando éste síntomas de abstinencia, enfatizando, además, tanto dicho profesional como la abogada del Servicio de Salud de Magallanes, que el



señor Díaz cumple con los requisitos para ser ingresado a un ELEAM, profesional esta última que recalcó además que en caso de concretarse dicho ingreso el señor Díaz tendría sus atenciones de salud garantizadas por la red de salud local.

Añade que el día 07 de febrero de 2022, en causa RIT 2678-2018, y a la que se aludió, el doctor don Álvaro Ríos fue claro y enfático en señalar que desde su ingreso a la Unidad de Corta Estadía el imputado no presentó síntomas de abstinencia, lo que da cuenta - según explicó este profesional - que su consumo no es en altas cantidades, encontrándose estabilizado, por lo que - concluyó el profesional - el imputado puede ingresar a un ELEAM, comprometiéndose al diseño de un esquema farmacológico para el manejo impulsivo o conductual del imputado durante su residencia en el ELEAM.

Refiere que Teodoro del Carmen Ojeda, imputado en la causa RIT Nro. 1340-2021, se vincula con la decisión adoptada a su respecto, en audiencia de 26 de enero de 2022, en orden a instruir diligencias o actuaciones tendientes a que el imputado fuera recibido en el ELEAM Cristina Calderón Harban a contar del día 28 de febrero en adelante, ante el inminente cierre del denominado Albergue 1, dependiente de FIDE XII, para personas en situación de calle, donde el imputado cumplía la medida de arresto domiciliario total, el suscrito rechaza las imputaciones de ilegalidad y arbitrariedad atribuidos por el recurrente a ese dictamen, por cuanto, según lo actuado en este proceso, estamos hablando de una persona octogenaria que tras el cierre del referido albergue, proyectado para el 27 de febrero, iba a quedar en situación de calle y sin ningún dispositivo de apoyo, según lo informado al Tribunal por la Coordinadora del Albergue 1 en audiencia de 29 de diciembre de 2021.

Hace presente que los reparos concretos, formulados por el SENAMA en su oficio Nro. 22, de 01 de marzo de 2022, relacionados con la manera en que se verificó el ingreso del imputado al ELEAM, se vinculan con aspectos más bien formales, consistentes en no haberse aportado, al momento de





concretarse su traspaso desde el Albergue 1, determinada documentación consistente en informe social, informe de evaluación médica, liquidación de pensión, registro social de hogares, cédula de identidad del adulto mayor copia de cédula de identidad de tutor y/o persona significativa, oficio que el suscrito proveyó mediante resolución de 03 de marzo, por la cual se ofició a Fide XII para efectos del envío de los antecedentes pertinentes indicados por Senama en el referido oficio.

Destaca que según lo informado en la audiencia de 26 de enero de 2022 por la encargada del Albergue para personas en situación de calle, el señor Teodoro del Carmen Ojeda es una persona autovalente, que no necesita uso de pañales, se desplaza sin dificultades, siendo su única complejidad un deterioro importante de la memoria, requiriendo, por lo mismo, de apoyo para el consumo de sus medicamentos.

Concluye que al resolver del modo cuestionado por la recurrente, procedió de acuerdo a la normativa legal vigente, procurando compatibilizar la necesidad de cautelar en cada proceso, consistente principalmente en velar por la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, con la situación personal de los imputados, considerando además la falta de otra solución concreta que fuera viable para albergar a estas dos personas, ambos adultos mayores.

En todo caso, como se comprende de lo expuesto en este informe, estamos hablando, en ambos procesos, de medidas o providencias cautelares, es decir, medidas transitorias, esencialmente provisionales y revisables en cualquier momento durante la tramitación de la causa, una de ellas radicada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y otra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esta ciudad, por requerimiento de medida de seguridad

Acompaña a su informe antecedentes de las causas y registros de audios de las mismas.

De la misma manera compareció Eugenio Campos Lucero, Fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena quien hace presente que el recurso de protección, en análisis para



resolución, fue interpuesto en calidad de recurrido solo en contra del SR. Juez de Garantía de Punta Arenas don Juan Santiago Villa Martinez, no siendo procedente solicitar al Ministerio Publico informe dentro del plazo de seis días, respecto de las actuaciones supuestamente arbitrarias e ilegales cuestionadas, las que no han sido realizadas por esta institución.

Si se estima que el Ministerio Público podría aportar antecedentes para la mejor resolución de la presente causa en razón de las funciones que desempeña, podría solicitarse en esos términos, y no en calidad de recurrido. Acompañó copia de los antecedentes de las causas en las que se resolvió internación de los imputados en el centro de larga estadía Eleam, Cristina Calderón Harban.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.



Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

**SEGUNDO:** Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

**TERCERO:** Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el actor, lo constituyen las resoluciones dictadas por el Juez recurrido, en autos RIT N° 4270-2020 y RIT N° 1340-2021 al decretar las medidas cautelares respecto de los imputados en cada causa.

**CUARTO:** Que, el Juez recurrido, da cuenta de las causas sustanciadas, en actual tramitación, señalando que las resoluciones cuestionadas por el actor fueron dictadas de acuerdo a la normativa legal vigente, procurando compatibilizar la necesidad de cautelar en cada proceso, consistente principalmente en velar por la protección de



víctimas de violencia intrafamiliar, con la situación personal de los imputados, considerando además la falta de otra solución concreta que fuera viable para albergar a estas dos personas, ambos adultos mayores.

**QUINTO:** Que, acorde a lo expuesto, el acto presuntivamente arbitrario e ilegal a que el recurrente alude como fundamento de su acción constitucional, emana de una resolución judicial dictada en primera instancia en causa sustanciada y en tramitación vigente ante el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.

**SEXTO:** Que, si bien el recurso de protección interpuesto en contra de un acto emanado de un Tribunal de la República, es excepcional y así están de acuerdo la doctrina y la jurisprudencia, en la especie no resulta procedente por encontrarse el asunto que lo motiva sometido al imperio del derecho, lo que descarta un caso excepción que permita adoptar por esta vía la medida que se solicita.

En efecto, el recurrente si bien no es interviniente en los procesos judiciales seguidos ante el Juzgado de Garantía y Tribunal de Juicio Oral de esta ciudad ha sido oído en las audiencias y mediante oficios, no pudiendo asimilar su situación jurídico-procesal a aquellos casos en que se han acogido recursos de protección contra resoluciones judiciales que afectan de manera ilegal o arbitraria derechos de terceros que no han participado en el proceso, pudiendo en calidad de tercero efectuar sus planteamientos en la instancia y de ese modo ejercer los recursos jurisdiccionales que la ley le franquea con la finalidad de revertir el acto o decisión que le agravia, siendo por ende este procedimiento constitucional inidóneo para lo que pretende, esto es, que se deje sin efecto lo resuelto por el juez llamado por la ley a conocer del asunto, contando, por último, contra su decisión con las herramientas legales y recursos procesales ordinarios o extraordinarios para el efecto señalado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado

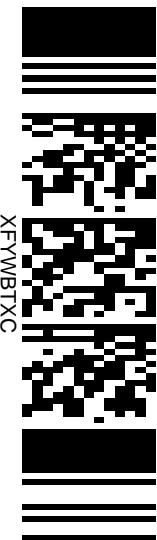


sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, **SE RECHAZA** el recurso de protección interpuesto por Matías Ignacio Rivadeneira Castro, en representación de las personas señaladas en contra Juan Santiago Villa Martínez, juez del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

**ROL N° 101-2022 PROTECCIÓN.**



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas integrada por Ministro Marcos Jorge Kusanovic A., Ministro Suplente Claudio Marcelo Jara I. y Fiscal Judicial Pablo Andres Miño B. Punta arenas, ocho de abril de dos mil veintidós.

En Punta arenas, a ocho de abril de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

